Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00441
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Estrely Beltrán Macea
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[1], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[1] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[2], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[2] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

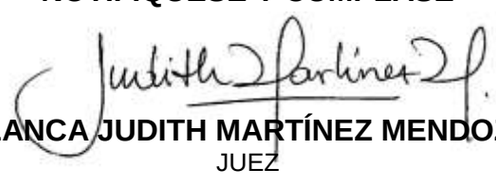
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00441.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

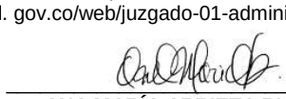
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00442
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Juana Fidelina Miranda Zúñiga
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[3], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[3] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[4], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[4] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Ciénaga de Oro, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00442.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

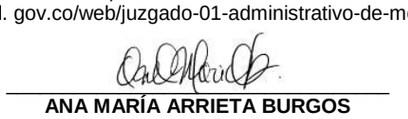
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www.ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00443
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Ana Matilde Cogollo Cogollo
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[5], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[5] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[6], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[6] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Cereté, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00443.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

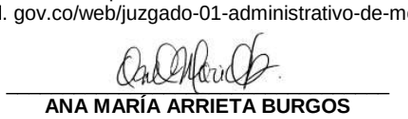
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www.ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00444
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Divis María Rorrente Narvaez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[7], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[7] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[8], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[8] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

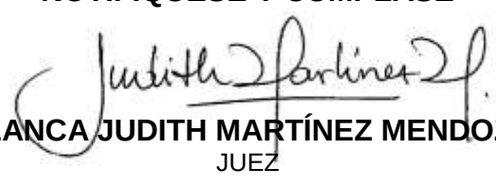
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00444.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

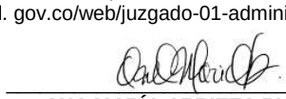
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00445
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: LuzMila Díaz Guzmán
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[9], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[9] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[10], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[10] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montelíbano, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00445.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00446
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Sonia Esther Viloria Julio
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[11], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[11] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[12], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[12] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

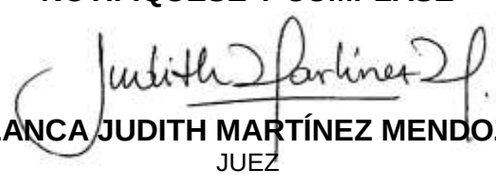
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00446.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

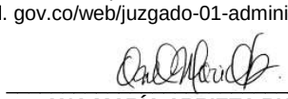
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00447
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Martha Florencia López Ramos
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[13], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[13] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[14], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[14] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

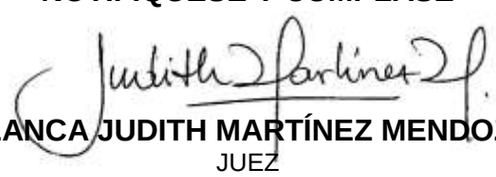
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00447.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

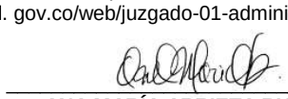
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00448
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Katy Miranda Martínez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[15], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[15] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[16], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[16] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00448.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00449
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Elvia Rosa Hoyos Patrón
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[17], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[17] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[18], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[18] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

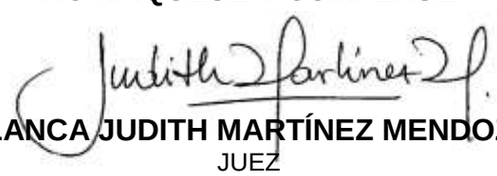
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00449.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00450
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Gladys Álvarez de Arroyo
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[19], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[19] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[20], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[20] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

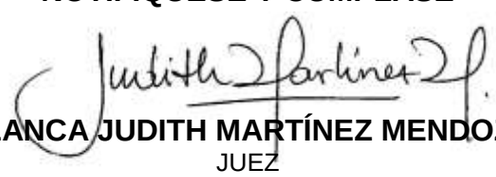
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00450.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

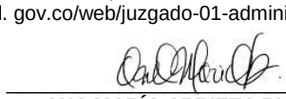
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00451
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Aminta Sofía Guzmán Manchego
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[21], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[21] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[22], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[22] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00451.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00452
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Catia Elena Florez Mundoy
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[23], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[23] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[24], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[24] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Puerto Libertador, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00452.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00453
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yolanda Isabel Contreras Montalvo
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[25], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[25] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[26], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[26] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Puerto Libertador, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

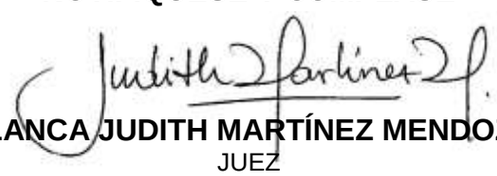
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00453.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00454
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Mariela Pérez Argel
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[27], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[27] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[28], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[28] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

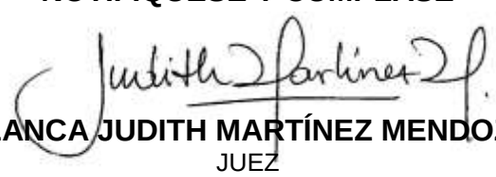
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00454.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

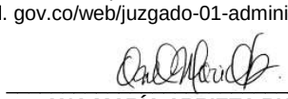
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00455
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Denis Judit Trepalacio Ballesteros
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[29], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[29] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[30], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[30] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Ayapel, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Ayapel.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

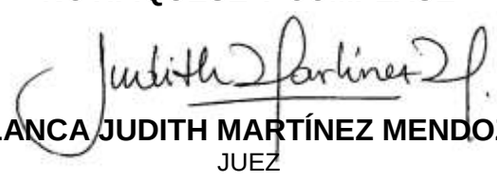
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00455.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Ayapel.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00456
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Blanca Rosa Vergara Álvarez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[31], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[31] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[32], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[32] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Sahagún, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sahagún.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

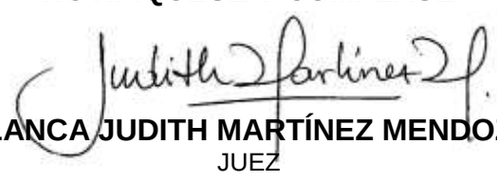
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00456.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sahagún.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00457
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Enoales del Carmen Yanez Caly
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[33], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[33] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[34], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[34] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Puerto Libertador, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

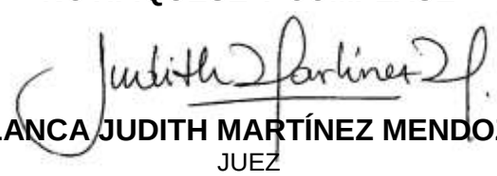
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00457.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00458
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Luz Mady Trujillo Pérez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[35], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[35] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[36], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[36] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montelíbano, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

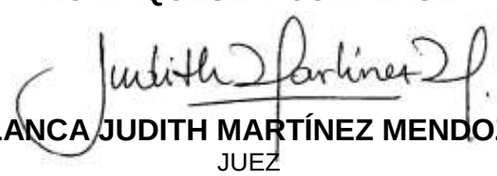
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00458.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00459
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Erica del Carmen Agamez Martínez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[37], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[37] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[38], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[38] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Ciénaga de Oro, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00459.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

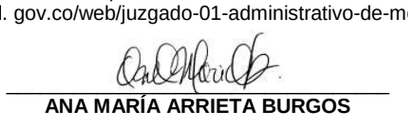
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00460
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Ena Luz Mestra Araujo
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[39], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[39] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[40], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[40] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Ayapel, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Ayapel.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

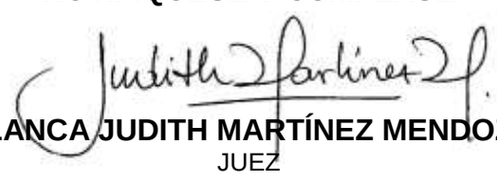
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00460.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Ayapel.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00461
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Maruja Isabel Pineda Martínez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[41], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[41] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[42], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[42] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Cereté, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00461.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00462
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Maira Milena Flórez Pérez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[43], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[43] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[44], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[44] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Sahagún, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sahagún.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

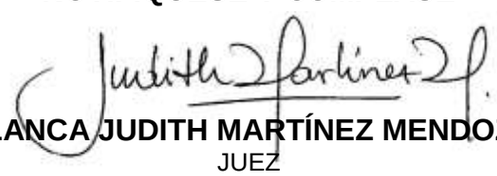
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00462.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sahagún.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00463
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Edith María González Díaz
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[45], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[45] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[46], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[46] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Puerto Libertador, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

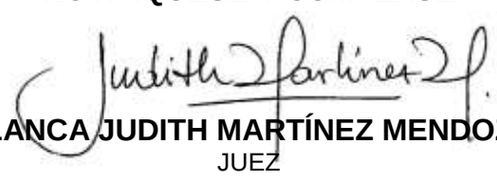
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00463.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00464
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Enith Rocío Pérez Álvarez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[47], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[47] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[48], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[48] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00464.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00465
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Mayerling Montes Villalba
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[49], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[49] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[50], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[50] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Sahagún, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sahagún.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00465.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sahagún.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00466
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Carmenza de Jesús Mejía López
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[51], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[51] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[52], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[52] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Ciénaga de Oro, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00466.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

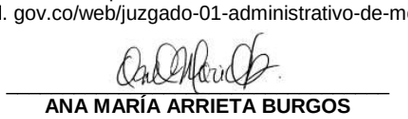
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www.ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00467
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Aleida María Ramírez Salgado
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[53], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[53] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[54], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[54] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00467.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00468
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Inelda María Genes Cardona
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[55], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[55] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[56], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[56] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

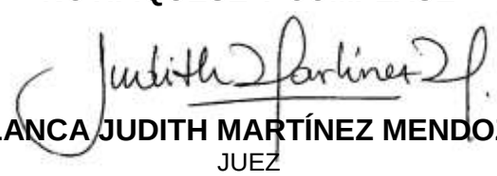
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00468.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00469
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Luz Elena Osorio Martínez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[57], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[57] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[58], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[58] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Puerto Escondido, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

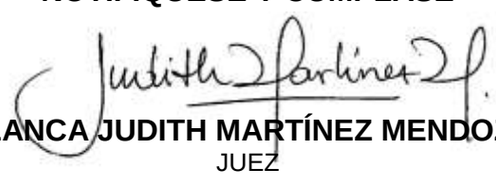
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00469.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

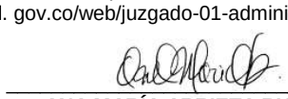
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00470
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Nancy Margoth Santana Medina
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[59], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[59] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[60], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[60] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Buenavista, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

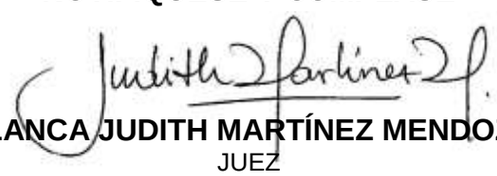
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00470.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00471
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Julia de Jesús Trujillo Cataño
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[61], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[61] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[62], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[62] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

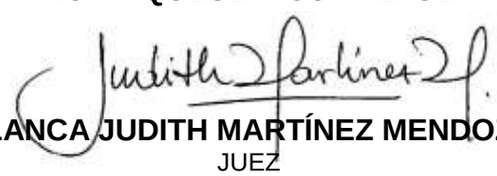
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00471.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00472
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Nohemis Yasmín Prasca Vega
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[63], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[63] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[64], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[64] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Sahagún, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sahagún.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

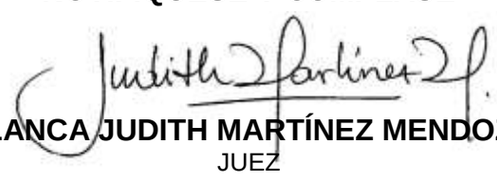
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00472.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sahagún.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00473
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yaneth María Herazo Peña
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[65], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[65] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[66], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[66] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Puerto Libertador, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

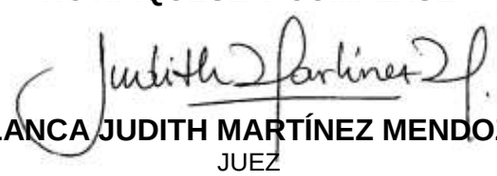
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00473.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00474
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Nelly del Rosario Narvaez Hernández
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[67], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[67] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[68], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[68] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Lorica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

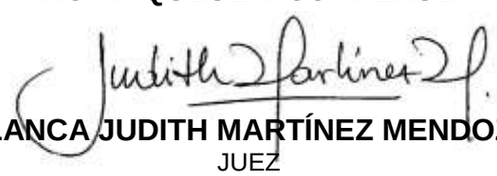
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00474.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00475
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Martina Olea de Fuentes
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[69], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[69] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[70], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[70] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Lorica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00475.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00476
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Marily Isabel Oviedo Serpa
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[71], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[71] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[72], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[72] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Sahagún, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sahagún.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00476.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sahagún.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00477
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Alba Cecilia Araujo Durango
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[73], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[73] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[74], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[74] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Ciénaga de Oro, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00477.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

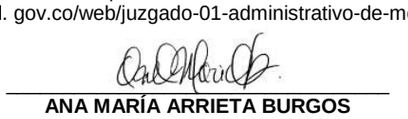
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00478
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Martha Cecilia Medrano Vidal
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[75], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[75] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[76], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[76] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Ciénaga de Oro, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00478.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

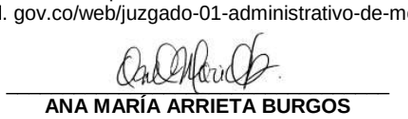
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www.ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00479
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Neodys del Carmen Ortega Prieto
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[77], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[77] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[78], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[78] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Lorica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

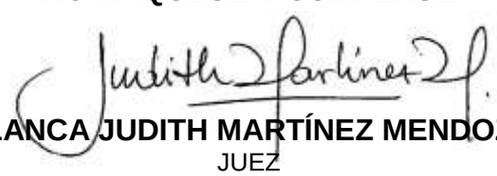
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00479.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00480
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Aracely María Morales Jaramillo
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[79], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[79] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[80], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[80] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montelíbano, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00480.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00481
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Clara Inés Chantaga Blanco
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[81], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[81] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[82], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[82] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

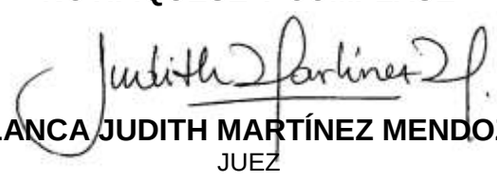
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00481.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00482
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Zenaida Padilla Casarrubia
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[83], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[83] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[84], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[84] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

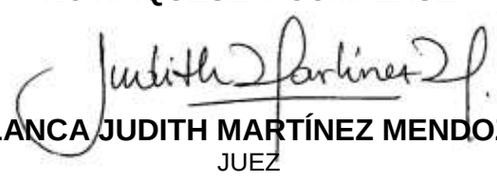
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00482.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00483
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Rosa del Carmen Guerrero Correa
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[85], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[85] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[86], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[86] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Lorica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

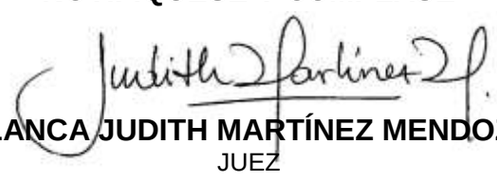
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00483.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00484
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Denis Isabel Fernández Barrios
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[87], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[87] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[88], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[88] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Puerto Libertador, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

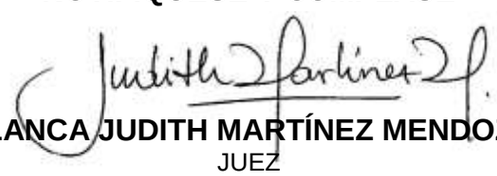
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00484.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00485
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Noralba Rosa Rada Vega
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[89], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[89] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[90], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[90] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montelíbano, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

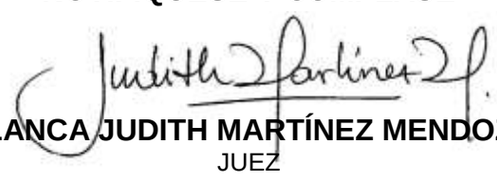
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00485.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00486
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Teodora de Jesús Pérez Monterroza
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[91], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[91] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[92], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[92] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Buenavista, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

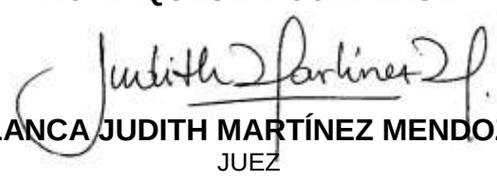
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00486.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00487
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Ledis Margoth Bedoya Bedoya
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[93], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[93] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[94], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[94] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Ciénaga de Oro, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00487.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00488
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Rosa Amira Ramos Castillo
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[95], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[95] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[96], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[96] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Ciénaga de Oro, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00488.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

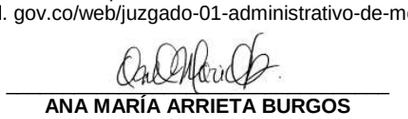
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www.ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00489
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Algemira Garnautt Pastrana
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[97], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[97] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[98], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[98] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

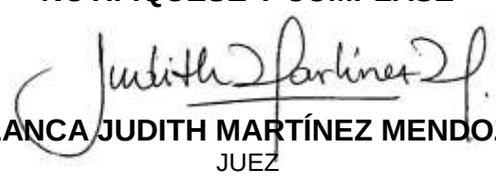
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00489.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

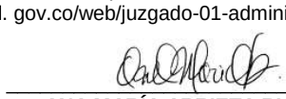
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00490
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Ingrid del Carmen Echeverry Jiménez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[99], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[99] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[100], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[100] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Buenavista, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

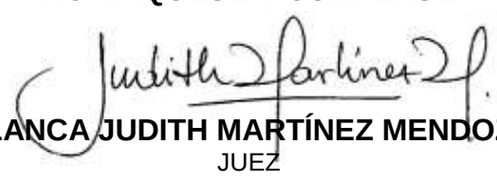
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00490.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00491
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Armida del Carmen Jiménez Lozano
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[101], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[101] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[102], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[102] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montelíbano, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

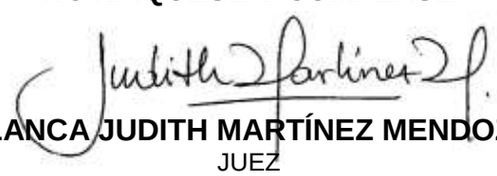
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00491.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00492
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Nubia Isabel Pantoja Uparel
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[103], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[103] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[104], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[104] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Ciénaga de Oro, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00492.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

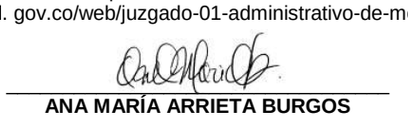
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www.ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00493
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Miriam del Socorro Martínez de Agamez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[105], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[105] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[106], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[106] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

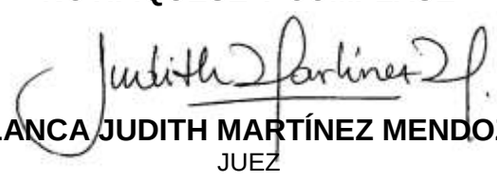
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00493.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00494
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Elvira Raquel Cantellón Aguirre
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[107], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[107] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[108], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[108] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Sahagún, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sahagún.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

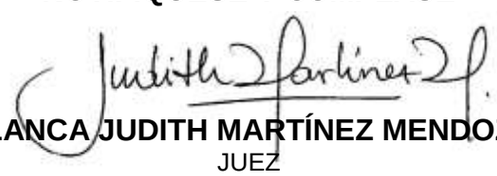
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00494.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sahagún.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00495
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Blanca Rosa Hernández López
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[109], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[109] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[110], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[110] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Lorica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

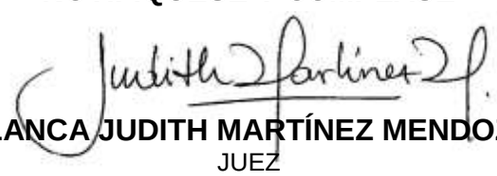
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00495.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00496
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Ena Isabel Moreno Julio
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[111], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[111] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[112], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[112] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Lorica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

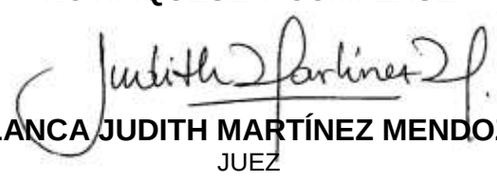
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00496.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00497
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Ana Delfa Cardoza de Hernández
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[113], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[113] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[114], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[114] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Lorica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00497.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00498
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Alba Lucía Muñetón
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[115], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[115] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[116], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[116] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Puerto Libertador, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

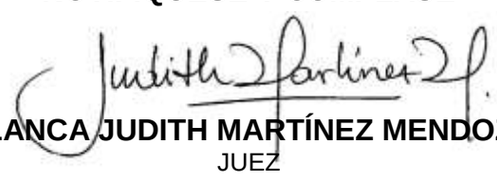
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00498.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00499
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Mónica Patricia Petro Warner
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[117], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[117] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[118], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[118] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Sahagún, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sahagún.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

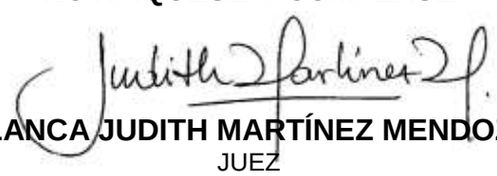
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00499.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sahagún.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00500
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Ayda Elena Pacheco Seiza
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[119], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[119] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[120], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 110010102000201701800-00 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[120] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

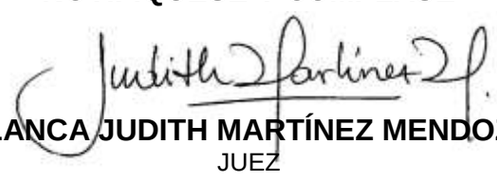
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00500.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00714
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Mileida de Jesús Polo Coa
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[121], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[121] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[122], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[122] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Lorica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

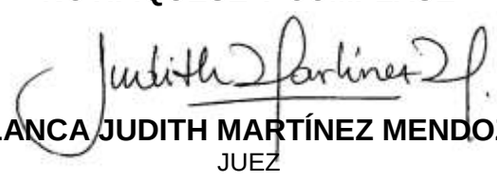
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00714.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00715
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Consuelo del Carmen Pérez Bohorquez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[123], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[123] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[124], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 110010102000201701800-00 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[124] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Puerto Libertador, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

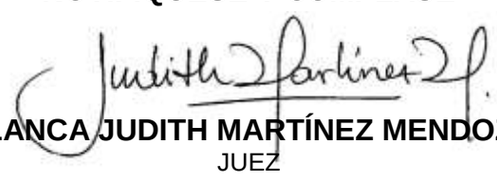
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00715.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Montelíbano.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00716
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Felipa Fuentes Galvis
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[125], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[125] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[126], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[126] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Moñitos, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

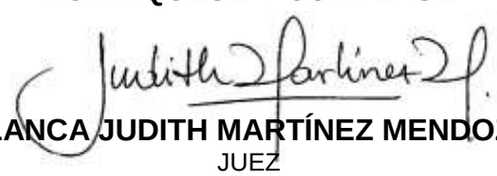
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00716.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00717
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Arelis Palencia Álvarez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[127], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[127] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[128], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[128] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Moñitos, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00717.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00718
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Neiris del Carmen Tuirán Arrieta
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[129], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[129] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[130], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[130] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

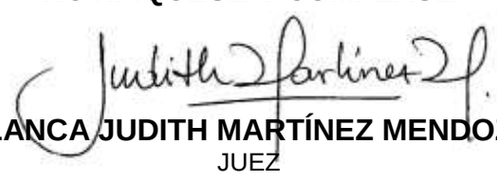
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00718.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00719
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Rosmary Peña Arcia
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[131], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[131] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[132], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[132] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

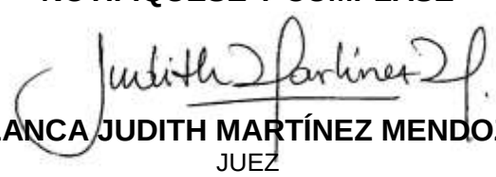
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00719.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

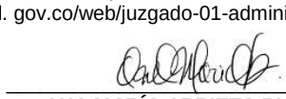
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00720
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Gleidis Sánchez Medina
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[133], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[133] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[134], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[134] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Lorica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

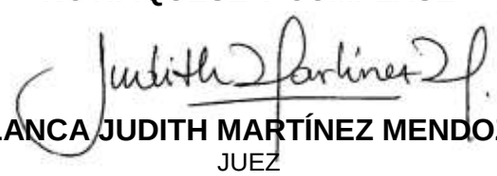
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00720.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00721
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Miladys María Conde Carvajal
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[135], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[135] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[136], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[136] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de San Pelayo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00721.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

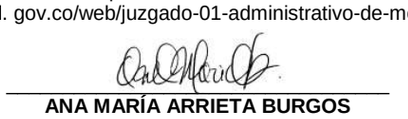
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www.ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00722
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Luz Marina Sánchez Cordero
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[137], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[137] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[138], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[138] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

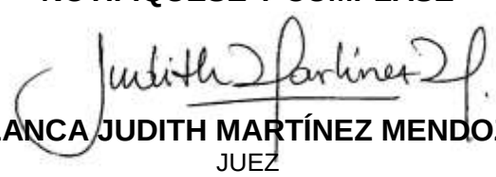
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00722.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

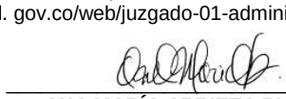
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00723
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Noris Barrios Padilla
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[139], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[139] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[140], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[140] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Moñitos, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

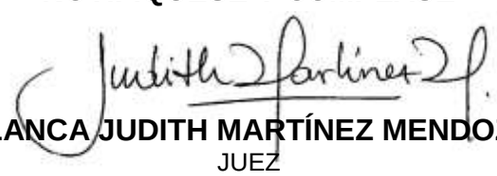
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00723.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00724
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Rosalba Isabel Romero Pereira
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[141], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[141] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[142], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[142] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Pueblo Nuevo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

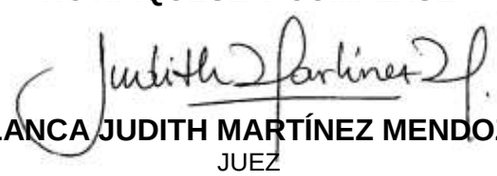
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00724.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00725
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Caridad Sofía Silgado Avendaño
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[143], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[143] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[144], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[144] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Moñitos, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

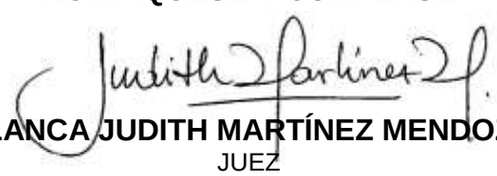
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00725.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00726
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Ana Raquel Vitar García
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[145], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[145] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[146], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[146] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Moñitos, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

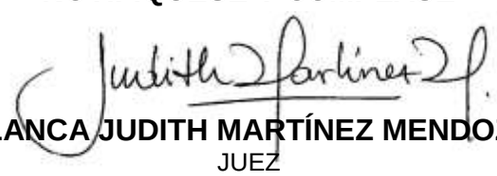
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00726.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00727
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Maritza Fuentes Doria
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[147], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[147] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[148], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[148] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Moñitos, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

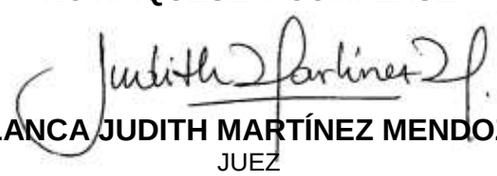
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00727.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00728
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Rosa Elisa Sotomayor de Doria
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[149], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[149] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[150], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[150] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de San Carlos, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00728.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

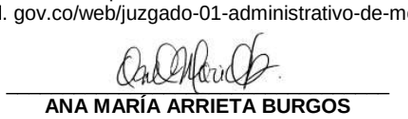
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www.ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00729
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Ana Rosalba Argel Díaz
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[151], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[151] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[152], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[152] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Cereté, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00729.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

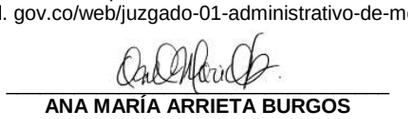
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www.ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00730
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Clara Estrada Saez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[153], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[153] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[154], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[154] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

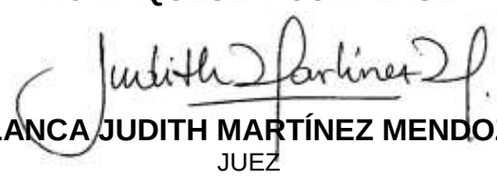
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00730.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00731
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Cielo del Pilar Muñoz Ros
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[155], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[155] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[156], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[156] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

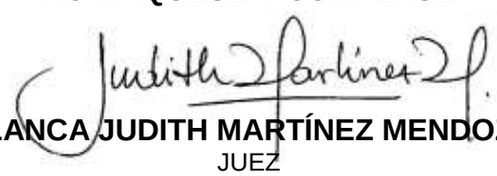
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00731.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00732
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Nancy del Carmen Moreno Álvarez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[157], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[157] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[158], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[158] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

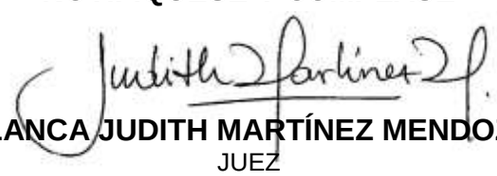
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00732.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00733
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Delfina del Socorro Arrieta Mestra
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[159], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[159] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[160], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[160] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Pueblo Nuevo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

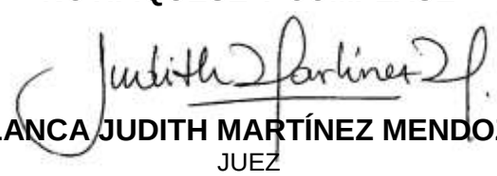
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00733.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00734
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Lucía María González Cadena
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[161], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[161] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[162], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[162] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Pueblo Nuevo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

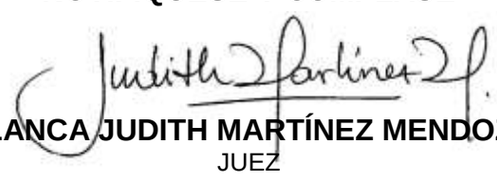
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00734.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00735
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Narly Luz Ciprian Ortiz
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[163], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[163] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[164], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[164] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

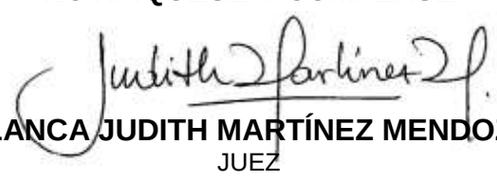
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00735.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00736
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Delfina Andrea Vergara Contreras
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[165], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[165] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[166], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[166] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Los Córdobas, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

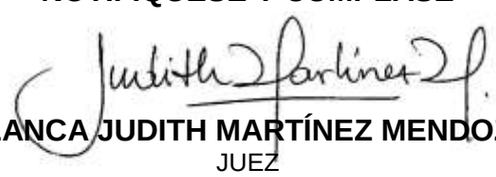
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00736.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

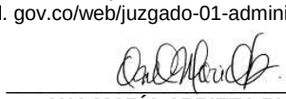
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00737
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Carmen Alicia Castillo Bernal
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[167], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[167] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[168], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[168] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

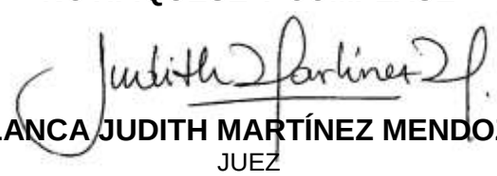
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00737.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00738
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Eliodeth del Rosario Martínez Cantero
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[169], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[169] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[170], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[170] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

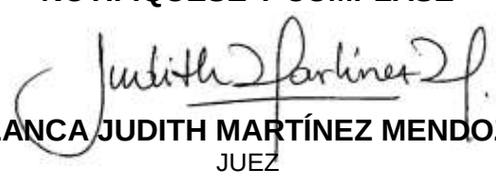
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00738.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

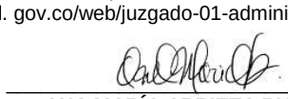
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00739
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Lina Isabel Padilla Sierra
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[171], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[171] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[172], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[172] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

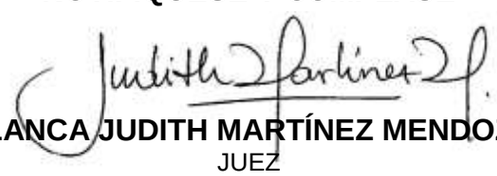
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00739.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00740
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Maribel del Carmen Pastrana Mestra
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[173], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[173] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[174], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 110010102000201701800-00 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[174] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de San Carlos, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00740.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

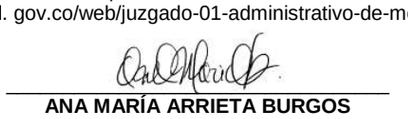
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00741
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Marelbi Sofía Alemán Herrera
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[175], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[175] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[176], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[176] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Pueblo Nuevo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00741.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00742
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Gladis Isabel Bedoya Soto
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[177], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[177] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[178], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[178] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

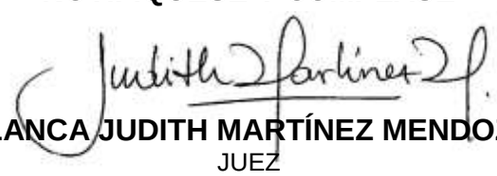
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00742.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00743
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Luz Elena Acosta Jiménez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[179], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[179] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[180], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[180] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

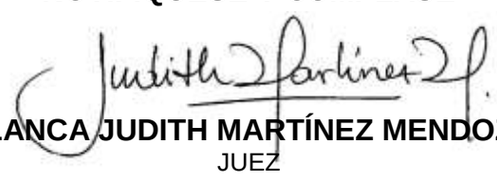
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00743.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00744
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Ledys María Anaya Romero
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[181], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[181] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[182], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[182] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

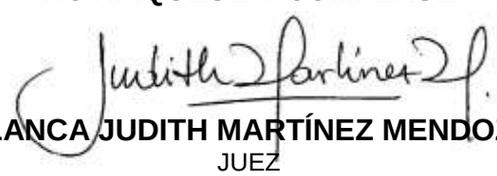
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00744.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00745
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Eludis Isabel Mercado Fuentes
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[183], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[183] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[184], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[184] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Moñitos, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

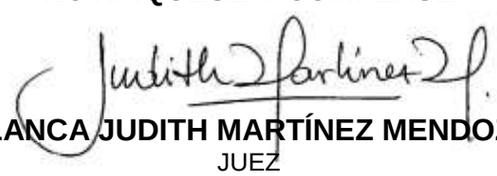
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00745.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00746
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Nelsy del Carmen Acosta Morales
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[185], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[185] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[186], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[186] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

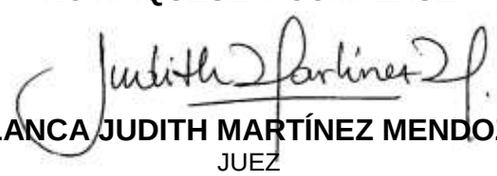
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00746.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00747
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Rosa María Suárez Flórez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[187], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[187] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[188], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[188] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Moñitos, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

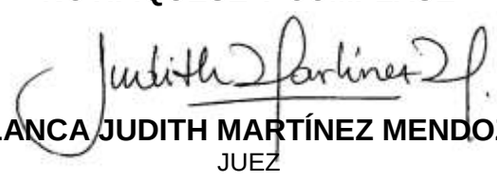
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00747.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00748
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Levis Osiris Vargas Almario
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[189], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[189] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[190], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 110010102000201701800-00 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[190] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Moñitos, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

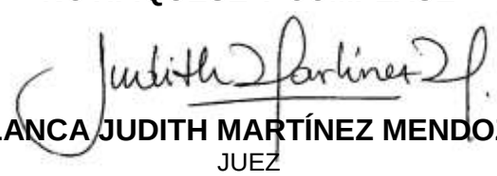
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00748.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00749
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Eni del Carmen Martínez Guzmán
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[191], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[191] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[192], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[192] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Moñitos, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

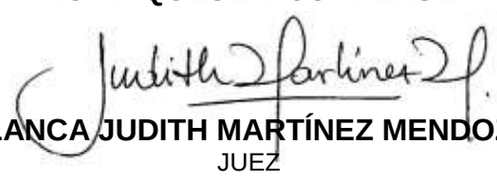
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00749.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00750
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Enaisa del Carmen Díaz Andrade
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[193], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[193] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[194], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 110010102000201701800-00 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[194] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

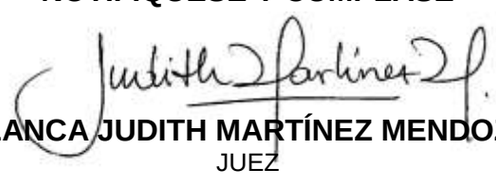
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00750.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

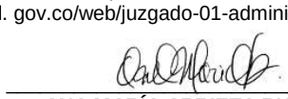
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00751
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yenis del Carmen Ayazo Velásquez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[195], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[195] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[196], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[196] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de San Pelayo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00751.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

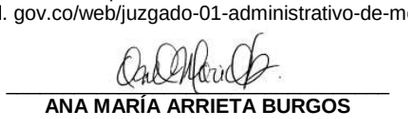
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00752
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: María Judith Otero Jaramillo
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[197], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[197] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[198], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[198] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Cereté, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00752.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

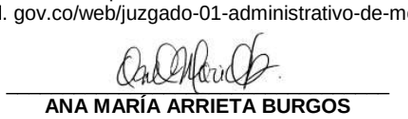
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www.ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00753
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Erica María Moreno Argel
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[199], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[199] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[200], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[200] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

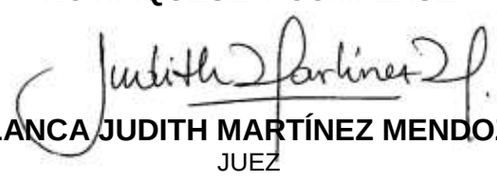
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00753.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00754
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Miladis Vega Ballesta
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[201], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[201] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[202], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[202] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

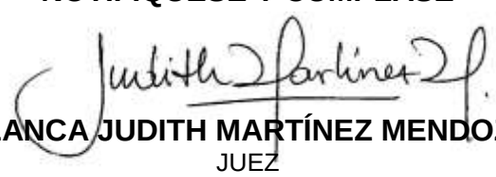
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00754.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

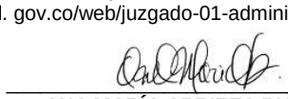
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00755
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yuly del Carmen Hotos Mejía
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[203], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[203] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[204], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[204] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

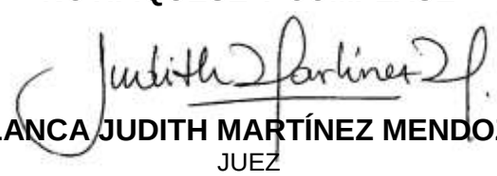
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00755.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00756
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Marlene del Carmen Pacheco Saavedra
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[205], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[205] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[206], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[206] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Moñitos, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

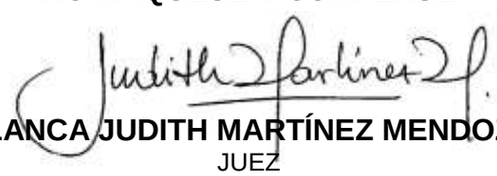
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00756.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Lorica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00757
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Edenis María Garavito Morelo
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[207], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[207] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[208], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[208] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

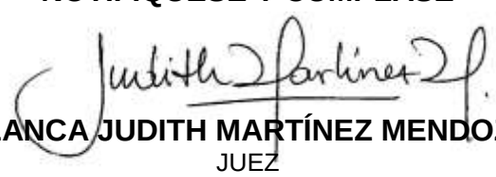
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00757.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

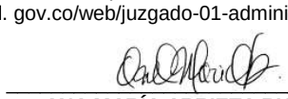
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00758
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Nelly Margarita Rubio Torres
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[209], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[209] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[210], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[210] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

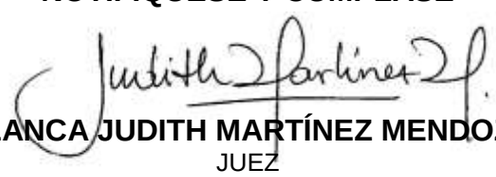
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00758.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

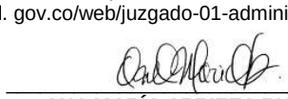
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00759
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Nancy Margoth Calle Argumedo
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[211], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[211] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[212], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[212] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Pueblo Nuevo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

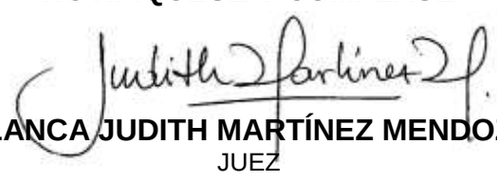
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00759.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00760
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Rosa María Humanez Rivero
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[213], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[213] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[214], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[214] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Cereté, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00760.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito Judicial de Cereté para su correspondiente reparto..

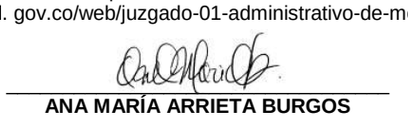
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00761
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Rosalba Patricia Nisperuza Peña
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[215], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[215] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[216], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[216] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Pueblo Nuevo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

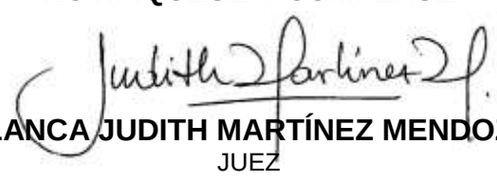
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00761.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00762
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Miden Marlene Medrano Villadiego
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[217], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[217] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[218], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[218] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

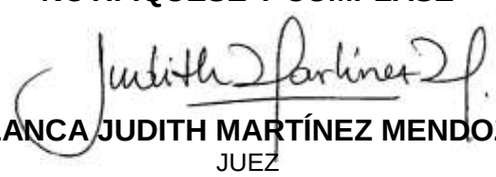
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00762.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

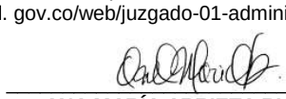
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00763
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Josefa del Carmen Ortega Miranda
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[219], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[219] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[220], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[220] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Pueblo Nuevo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

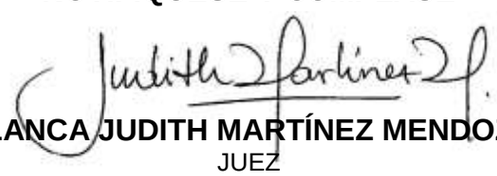
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00763.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00764
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Luz Neira Escudero Martínez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[221], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[221] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[222], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[222] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Pueblo Nuevo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

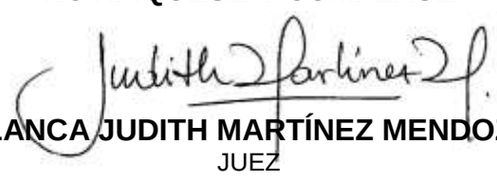
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00764.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00765
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Carmen Lucía Flórez Paez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[223], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[223] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[224], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[224] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

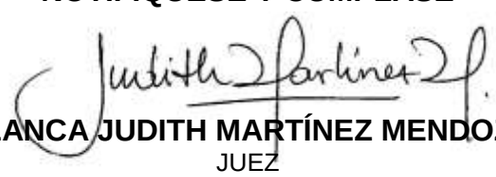
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00765.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

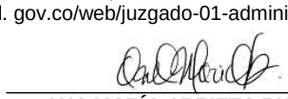
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00766
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Luz Marina Vergara Coronado
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[225], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[225] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[226], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[226] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00766.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00767
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Julia Esther Pérez Oviedo
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[227], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[227] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[228], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[228] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

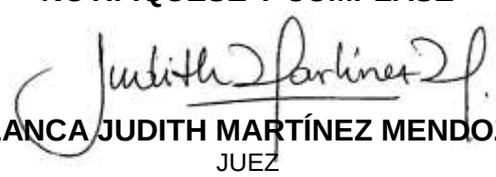
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00767.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

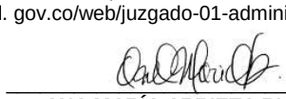
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00768
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Jennis del Carmen Arcia Lobo
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[229], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[229] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[230], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[230] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Pueblo Nuevo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

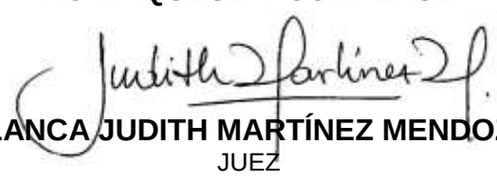
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00768.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00769
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Virginia Mosquera Rodiño
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[231], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[231] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[232], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[232] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

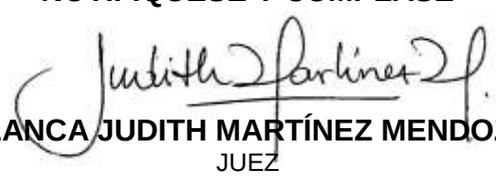
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00769.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

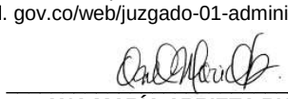
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00770
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Adela González Martínez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[233], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[233] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[234], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[234] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

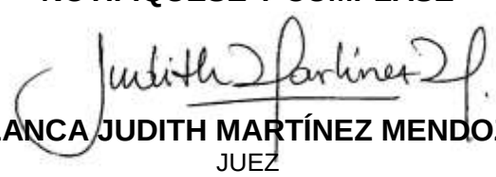
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00770.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

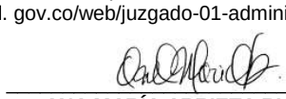
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00771
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Luz Elena Galindo Estrada
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[235], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[235] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[236], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[236] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

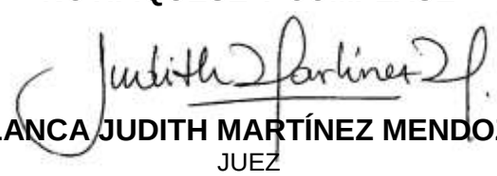
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00771.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00772
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Ceneydis de Jesús Corpas Gómez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[237], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[237] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[238], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 110010102000201701800-00 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[238] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Pueblo Nuevo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

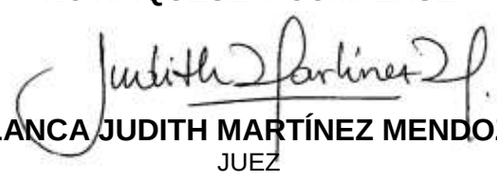
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00772.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00773
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: María de los Ángeles Yepez Pertuz
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[239], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[239] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[240], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[240] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

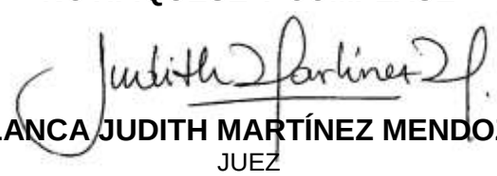
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00773.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00774
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Bella Faride Soto Vega
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[241], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[241] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[242], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[242] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

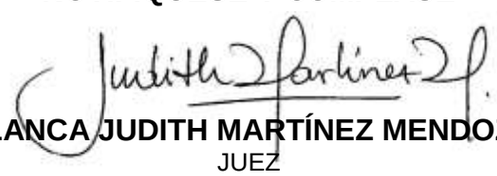
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00774.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00775
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Tulia Celina Silgado
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[243], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[243] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[244], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[244] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

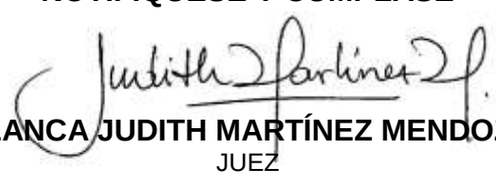
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00775.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

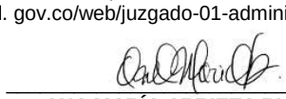
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00776
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Navid del Carmen Arrieta Narvaez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[245], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[245] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[246], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[246] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

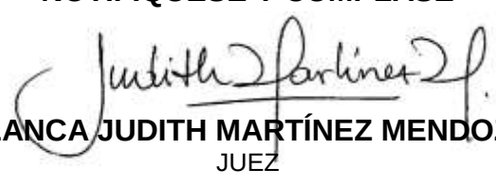
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00776.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

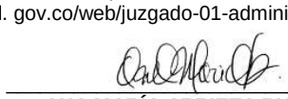
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00777
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Margarita Jesús Martínez González
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[247], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[247] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[248], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[248] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

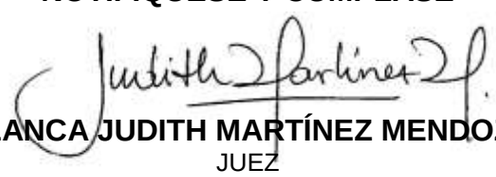
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00777.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

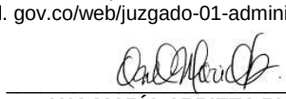
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00778
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Cristina del Carmen Argumedo Vidal
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[249], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[249] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[250], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[250] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Pueblo Nuevo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

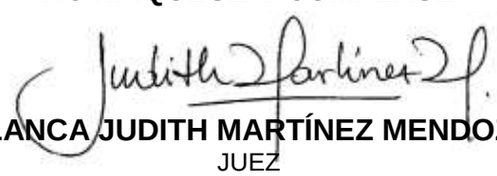
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00778.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00779
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Floira del Carmen Velásquez López
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[251], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[251] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[252], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[252] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Pueblo Nuevo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

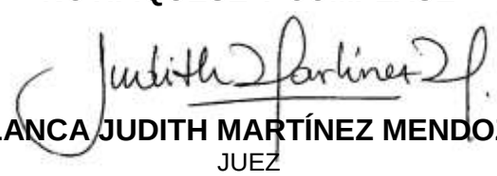
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00779.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00780
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Noris del Carmen Rivero Padilla
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[253], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[253] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[254], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[254] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

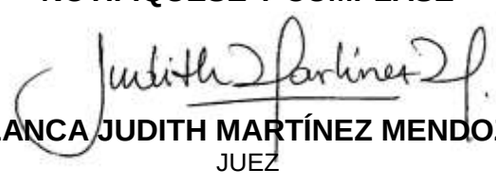
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00780.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

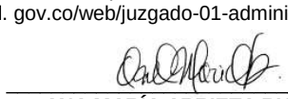
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00781
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Delys del Carmen Molina López
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[255], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[255] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[256], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[256] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Montería, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

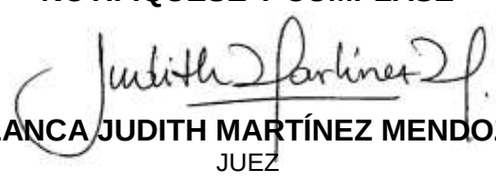
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00781.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente a la Oficina Judicial de estad ciudad para que realice el respectivo reparto entre los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Montería.

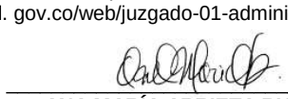
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00782
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Arelys del Carmen Mejía Guerra
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[257], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[257] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[258], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[258] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de La Apartada, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Ayapel.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

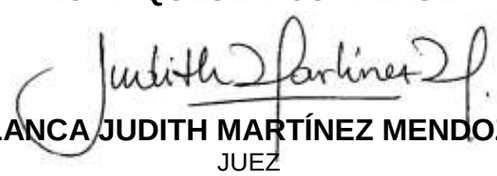
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00782.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Ayapel.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00783
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Nubia Sofía Sánchez Ricardo
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[259], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[259] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[260], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[260] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Planeta Rica, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

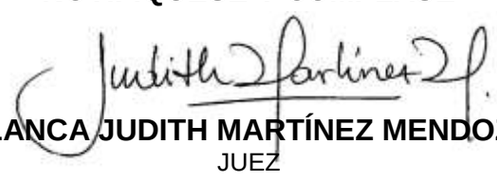
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00783.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria

Constancia Secretarial. Montería, 13 de diciembre de 2017.

Al Despacho de la señora Juez informando que se recibió el presente expediente procedente del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Se encuentra pendiente de resolver si se admite o no el impedimento propuesto. Provea.

ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretario

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)
Calle 27 Nº 4-08 Centro –Antiguo Hotel Costa Real – Telefax 7814277
Correo Electrónico adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co

Montería, diciembre trece (13) de dos mil diecisiete (2017)

Expediente No. 23.001.33.33.001.2017-00784
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Deysi del Carmen Sánchez
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Visto el informe de Secretaría se procede a resolver sobre el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería para conocer del presente proceso, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Manifiesta la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, que se declara impedida para conocer de este asunto por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el cual señala: *"1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso"*.

Lo anterior teniendo en cuenta que uno de sus familiares en primer grado de consanguinidad, viene adelantando demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del ICBF, ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, con pretensiones en el mismo sentido, por lo que manifiesta que podría existir un interés directo o indirecto en las resultas del proceso de la referencia.

Por encontrarse procedente la causal invocada, se admitirá el impedimento manifestado por la doctora **AURA MILENA SÁNCHEZ JARAMILLO**, Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería, para conocer de este negocio.

Adicional a lo anterior y pese que lo procedente sería avocar el conocimiento del presente asunto y continuar su trámite, el Despacho encuentra la posible configuración de falta de jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, por las razones que se exponen a continuación:

Sea lo primero indicar que referente a los asuntos que conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el artículo 104 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su numeral 4º establece lo siguiente:

> *"Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos de derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*
>
> *Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)*
>
> *4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…) "*

Sobre el mismo tema el artículo 105 de la misma codificación, indica lo que prosigue:

> *"Artículo 105. Excepciones. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…)*
>
> *4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. (…)"*

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los conflictos que se susciten en ocasión al contrato de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que modificó las competencias que se atribuyeron a la jurisdicción laboral en su especialidad laboral y de seguridad social, así:

> *"Artículo 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. (…)"*

Por su parte la Ley 1607 de 2012[261], señala en su artículo 36 indica lo siguiente frente a las madres comunitarias y el tipo de vinculación que ostentan:

> *"Artículo 36. Durante el trascurso del año 2013, se otorgará a las Madres Comunitarias y Sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. De manera progresiva durante los años 2013, se diseñaran y adoptarán diferentes modalidades de vinculación, en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas*
>
> *La segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia 2014. Durante ese año, todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa. Las madres sustituta recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes"*

[261] "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

La Ley en cita, fue reglamentada parcialmente por el Decreto 289 de 2014[262], que se refirió a la modalidad de vinculación y calidad en las que se desempeñan su labor las Madres Comunitarias en sus artículos 2º y 3º, como pasa a transcribirse:

> *"ARTÍCULO 2. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social.*
>
> *ARTÍCULO 3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidoras públicas. Sus servicios se prestarán a las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios, las cuales tienen la condición de único empleador, sin que se pueda predicar solidaridad patronal con el ICBF. (…)"*

Así las cosas, del análisis sistemático de la normatividad que regula el tipo de vinculación y modalidad en que las Madres Comunitarias desempeñan su labor y atendiendo el debate que se plantea en la presente demanda, se puede afirmar que, las Madres Comunitarias no tendrán la calidad de servidores públicos según lo dispone las normas que anteceden, es decir, su vinculación no es de tipo legal y reglamentaria, por cuanto, no se materializa en el acto de nombramiento y la posesión del empleado; por el contrario, la relación que eventualmente se configuraría en caso de se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y el demandado ICBF, sería de naturaleza contractual. Por lo tanto, el presente asunto no es de conocimiento de esta jurisdicción, debido a que, se configura la excepción contemplada en el numeral 4° del artículo 105 del C.P.A.C.A, por cuanto, ventila un conflicto laboral entre una entidad pública y un trabajador oficial, en consecuencia, le corresponde su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, tal y como lo dispone lo normado en el Artículo 2º de la Ley 712 de 2001, anunciado anteriormente.

Adicionalmente, respecto a establecer la jurisdicción competente para conocer de asuntos como el del caso a marras, se trae a colación el pronunciamiento proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en providencia de 17 de septiembre de 2017, dentro de radicado 11001010200020170180000 con numeración interna 14460-33 y ponencia de la M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, dirimió un conflicto negativo entre el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Promiscuo de Corozal, en el que se asignó a éste último la competencia para conocer del asunto, el cual, sostuvo lo siguiente:

> *"Por lo anterior, en esa misma línea argumentativa, y por orden del Decreto 289 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la formalización de las madres comunitarias por parte del Presidente de la Republica, quien les garantizo un contrato laboral, éste Decreto señala veamos:*
>
> *"Artículo 2. Modalidad de vinculación. Las Madres Comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa Hogares y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el Sistema de Protección Social" sic*
>
> *Por lo anterior, la Sal encuentra acierto en lo manifestado por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO, al identificar la calidad del*

[262] "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

demandante más lo pretendido con la demanda, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez laboral del presente asunto

Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DSE COROZAL SUCRE, para lo de su competencia."

Por último, se extrae del acápite de los hechos, que la labor desempeñada por la demandante como Madre Comunitaria, fue desarrollada en el municipio de Pueblo Nuevo, razón por la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el conocimiento deberá ser asumido por el Juez con competencia para conocer asuntos laborales de ese Circuito Judicial.

Por lo anterior, éste Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente proceso, por lo que dará aplicación a lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

En mérito de lo expuesto, el juzgado primero administrativo del circuito judicial de montería, en uso de sus facultades,

RESUELVE

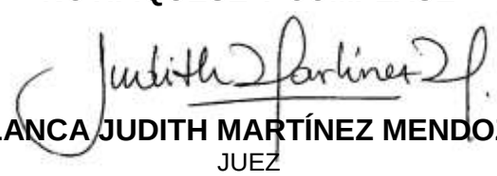
PRIMERO: Admitir el impedimento propuesto por la Juez Séptima Administrativa Oral del Circuito Judicial de Montería.

SEGUNDO: Cambiar la radicación a efectos de continuar con los códigos y consecutivos de esta dependencia, asignándole al expediente la partida número 23-001-33-33-001-2017-00784.

TERCERO: Declarar que esta unidad judicial carece de jurisdicción para conocer del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Por secretaria, remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Planeta Rica.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



BLANCA JUDITH MARTÍNEZ MENDOZA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA)

Montería, catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). El anterior auto se notifica a las partes por Estado Electrónico No. **101** a las 8:00 A.M. El cual puede ser consultado en el link http://www. ramajudicial. gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-monteria/71



ANA MARÍA ARRIETA BURGOS
Secretaria